

0073/2023

Tal y como resulta de la Exposición de Motivos del Proyecto, así como de su Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN), el Proyecto trae causa de lo dispuesto en la Disposición final duodécima de la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que establece que el Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, establecerá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, la tipología de empresas con actividad en el territorio nacional que deberán calcular y publicar su huella de carbono, así como los términos iniciales a partir de los cuales dicha obligación será exigible, su periodicidad y cualesquiera otros elementos necesarios para la configuración de la obligación. Para ello, las obligaciones derivadas de dicha Disposición se especificarán reglamentariamente a través de la modificación del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. En consecuencia, la MAIN especifica que el objetivo que persigue la norma es doble: por un lado establecer la tipología de empresas obligadas a calcular y establecer un plan de reducción, incluyendo los detalles técnicos que afectan a dicho cálculo y plan, en cumplimiento de la disposición final duodécima de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, y por otro introducir mejoras en el funcionamiento del Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y ampliar algunos aspectos de su ámbito de aplicación.

Entrando ya en el texto del Proyecto, y a los efectos de este informe, en lo relativo a la normativa sobre protección de datos personales, se contiene su regulación en el apartado Tres del artículo Único del Proyecto, que modifica los apartados 1 y 2 del artículo 4 del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, que quedarían con la siguiente redacción:

«1. La Oficina Española de Cambio Climático tratará los datos personales facilitados y publicará la información relevante contenida en el registro en las secciones a), b) y c) a través de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de conformidad al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, estando legitimado el tratamiento de los datos personales en base al artículo 6.1.e) del RGPD.

2. La información relevante referida en el apartado anterior incluirá nombre de los titulares inscritos, las huellas de carbono en términos

relativos o absolutos y otros elementos descriptivos de estas, los compromisos o medidas de reducción, el sello obtenido, y, en su caso, la cantidad compensada, en términos relativos y absolutos, y el proyecto a través del que se compensa. En el caso de la sección b), se incluirá el nombre del titular, descripción del proyecto y de la metodología utilizada, la ubicación del proyecto, documento de reconocimiento de la inscripción según el artículo 3.2, información de contacto, la valoración de los beneficios y otros elementos descriptivos, así como, la cantidad y tipo de las absorciones de carbono y, en su caso, los informes de seguimiento. Si se han retirado absorciones del proyecto, se indicarán las cantidades retiradas y las organizaciones o personas físicas que las han adquirido.»

A su vez, el art. 1 del RD 163/2014 crea el Registro de la Huella de carbono; el art. 2 establece la estructura del Registro, y el art. 3 los sujetos inscribibles.

En primer lugar, cabe recordar que la normativa de protección de datos personales (RGPD, LOPDGGD) tan sólo considera datos personales, y sometidos a su régimen, los datos de las personas físicas (art. 4.1 RGPD), quedando fuera de ella los datos de las personas jurídicas; por esa razón, lo que se mencione en este informe sólo va referido a los datos personales de las personas físicas. Lo anterior se expone porque en el art. 1 del RD 163/2014, en la redacción dada por el proyecto, se incluyen como sujetos inscribibles tanto a personas jurídicas como a personas físicas (así, a los “trabajadores autónomos” en el art. 3.1.a) o a “personas físicas” en el art. 3.1.b)), como a personas jurídicas.

La MAIN, al referirse a este tema, tan sólo dice que el art. 4 *actualiza la regulación sobre protección de datos, así como el detalle de la información a la que el Registro de huella dará difusión*. Nos encontramos por tanto con el hecho de que el Registro recoge determinados datos, y a algunos de entre ellos da difusión por ser el registro administrativo de carácter público. Pues bien, tanto la recogida de datos, como la difusión de ellos, son tratamientos de datos, según la definición del RGPD (art. 4.2 RGPD), y en consecuencia sujetos a su regulación, como acertadamente recoge el nuevo art. 4.1 del RD 163/2014, en la redacción dada por el Proyecto.

El art. 4.1 del RD 163/2014 recoge a su vez que de la información “*contenida*” en el Registro se “*publicará*” la “*información relevante*” a través de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No existe sin embargo en la MAIN un Análisis de Riesgos, y como consecuencia de dicho análisis, una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) de la que puedan resultar los riesgos y las medidas que puedan mitigar estos para que los tratamientos de datos personales que resultan de la norma, (cuando dicha “*información*” sean “*datos personales*”) y los datos

personales que se traten o difunden no supongan una injerencia más allá de lo estrictamente necesario en el derecho fundamental a la protección de datos de que disfrutaran las personas físicas.

Esta Agencia viene recomendando repetidamente en sus informes que el prelegislador, en aquellos casos, como el presente, en que los tratamientos puedan tener como base jurídica el art. 6.1.c) o e) del RGPD (esto es, tratamientos cuya base es una obligación legal o una misión de interés público), y venga establecida por el Derecho de la Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento y tal Derecho regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, como es el caso de las operaciones de tratamiento reguladas por el proyecto, haga uso de la posibilidad que establece el art. 35.10 RGPD de modo que sea el propio órgano proponente de la disposición general, en el curso del procedimiento de creación de la norma (ley, real decreto, etc.) quien realice una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica. Dicha EIPD habrá de incorporarse, como permite -casi debería decirse que lo impone, pero en cualquier caso no lo prohíbe- el art. 2.1, letra g), del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Este precepto es, además, suficientemente expresivo de la voluntad del legislador de incluir en la MAIN, dentro del concepto “Otros impactos”, el análisis del *“impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma”*.

*g) Otros impactos: **La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante** a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y medioambiental, al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y al impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma*

Esta Agencia recuerda, asimismo, que el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) establece que la política de seguridad del sistema de información deberá examinar y tener en cuenta *“los riesgos que se derivan del tratamiento de los datos personales”* (art. 12.1.f)), así como que en caso de que los sistemas de información traten datos personales (como sería el caso), en todo caso, prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el citado real decreto (art. 3.3).

En el caso presente, el Proyecto instaura un sistema de registros interoperables con las comunidades autónomas (denominado específicamente “sistema informático”, (art. 5)) y por tanto hubiera sido deseable cuando menos un Análisis de los riesgos de los tratamientos de datos personales que conlleva dicho sistema de Registro y la plasmación de su impacto en la MAIN.

Como se ha mencionado, el Proyecto prevé que la publicación sea sólo de una parte de los datos contenidos en el Registro, de aquellos que tienen la consideración de “información relevante”. El apartado 2 del art. 4 tiene una redacción un tanto ambigua, en el sentido de que dice que “la información relevante referida en el apartado anterior *incluirá*”. Dicha redacción debería de modificarse para especificar que “solo incluirá”, o expresión similar, que permita entender la lista de información que contiene como exhaustiva -se reitera que ello se refiere sólo a aquella información que tenga carácter de dato personal-.